

BRIDGES NETWORK

PUENTES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible

VOLUMEN 16, NÚMERO 7, SEPTIEMBRE 2015



Meganegociaciones y desarrollo sostenible: un cruce delicado

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO
TPP: desafíos para el Perú

ALIANZA DEL PACÍFICO
Chile y la Alianza del Pacífico

RECURSOS NATURALES
Privatización del agua en América Latina



International Centre for Trade
and Sustainable Development

PUENTES

VOLUMEN 16, NÚMERO 7, SEPTIEMBRE 2015

PUENTES

Plataforma global para el intercambio de información sobre comercio y desarrollo sostenible en América Latina.

PUBLICADO POR:

ICTSD

Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Ginebra, Suiza

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

Ricardo Meléndez-Ortiz

EDITOR EN JEFE

Andrew Crosby

DIRECTORA EDITORIAL

Perla Buenrostro Rodríguez (ICTSD)

EDITOR

Patricio Rosas Opazo

ASISTENTE EDITORIAL

Juan Martín Cava

CONSEJO EDITORIAL

Carlos Murillo (CINPE)

Pedro Roffe (ICTSD)

Miguel Rodríguez (ICTSD)

DISEÑO GRÁFICO

Flarvet

LAYOUT

Oleg Smerdov

PUENTES agradece sus comentarios y sugerencias en puentes@ictsd.ch

Para eventuales contribuciones consulte nuestra página web <http://ictsd.org/news/puentes/>

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

4 **TPP: desafíos para el Perú**

Alan Fairlie

ALIANZA DEL PACÍFICO

10 **Chile y la Alianza del Pacífico**

María del Carmen Domínguez

PESCA Y MEDIO AMBIENTE

14 **Herramientas comerciales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no regulada**

Margaret A. Young

RECURSOS NATURALES

20 **Privatización del agua en América Latina: implicancias para las políticas de desarrollo sostenible**

Julien Chaisse

REPORTAJE ESPECIAL

25 **Equidad, comercio y sostenibilidad, retos de América Latina**

Perla Buenrostro R.

28 **Sala de prensa**

30 **Publicaciones sugeridas**

Meganegociaciones y desarrollo sostenible: un cruce delicado



Una nueva agenda global para el desarrollo sostenible está a punto de lanzarse por la comunidad internacional. Líderes y delegaciones de todo el mundo estarán reunidos del 25 al 27 de septiembre en las Naciones Unidas, en Nueva York, para aprobar formalmente el documento "Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible".

El texto contiene diecisiete objetivos que abarcan áreas ligadas a la erradicación de la pobreza y el hambre, reducción de la inequidad, equidad de género, promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y acciones urgentes para combatir el cambio climático, entre otros, y que conformarán un nuevo marco de trabajo internacional.

Estos objetivos, conjuntamente con sus metas específicas y medios de implementación, persiguen renovar el compromiso internacional, pero también los esfuerzos nacionales en las tres dimensiones del desarrollo sostenible –económica, social y ambiental–, así como asegurar su cumplimiento efectivo hacia 2030.

La nueva agenda ofrece esperanza y renovación a dos de las grandes problemáticas de nuestra sociedad actual: la inequidad y la sustentabilidad. Asimismo, exige reformas importantes a nivel internacional, pero también en políticas públicas y legislaciones nacionales si su mandato se quiere tomar en serio. Por ejemplo, pide incrementar sustancialmente la eficiencia global de los recursos y desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental, donde nuestra región tiene mucho que explorar.

¿En qué medida los acuerdos megarregionales están respondiendo a consideraciones de desarrollo sostenible y se están alineando a la Agenda 2030? Las reservas en torno al Acuerdo de Asociación Transpacífico, por ejemplo, que involucra a Chile, México y Perú, han sido muy puntuales durante todo el proceso de negociación. Aspectos relacionados a propiedad intelectual, acceso a la salud, medio ambiente y derechos laborales han propiciado llamadas de atención por parte de especialistas y grupos de la sociedad civil.

¿Cómo encontrar ese equilibrio entre la apertura comercial, el desarrollo de normas –además en este caso fuera del sistema multilateral– y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que formarán parte de las obligaciones internacionales prácticamente de todos los participantes de las meganegociaciones?

Ese cruce delicado recae casi exclusivamente en los tomadores de decisiones y en las estrategias de desarrollo de largo plazo que los países se planteen así mismos. En el caso de las meganegociaciones como el TPP, habrá que esperar algo más para saber si las partes fueron capaces de mantener dicho equilibrio en el texto final o si, por el contrario, quedarán más bien lecciones que aprender y costos que asumir.

El equipo de Puentes.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

TPP: desafíos para el Perú

Alan Fairlie Reinoso

El presente artículo aborda la controvertida negociación del Acuerdo de Asociación transpacífico desde la perspectiva de Perú. El autor no solo describe la posición del TPP en la política comercial de Perú, sino además da las razones de su ingreso y su posición relativa en fenómenos como las cadenas globales de valor, sin perder de vista intereses en propiedad intelectual, controversias inversionista-Estado y desarrollo sostenible.

Los nuevos mega acuerdos comerciales tienen implicancias para la gobernanza global y pueden aumentar la dificultad para retomar las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC; [Kolsky, 2015](#)).

Estos tendrán mayores impactos económicos y sociales en los miembros y no miembros que los tratados de libre comercio (TLC) existentes, pues implican no solo una mayor liberalización, al ser su prioridad la reducción de las barreras no arancelarias, sino además una revisión de las regulaciones e instituciones internas, con lo que afectan a la sociedad. También influirían en la reestructuración de la demanda comercial regional y mundial ([Sugawara, 2015](#)).

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) es un acuerdo de integración profunda y, desde la entrada de Estados Unidos (EE.UU.), un megaproceso de implicancias globales que transformó el horizonte de la propuesta inicial del P4. El acuerdo ahora incluye nuevas cuestiones como coherencia regulatoria, competencia y contratación pública. Además de su potencial beneficio comercial, el TPP facilitaría la integración económica en la región Asia-Pacífico ([Yancan, 2012](#)).

La coexistencia de acuerdos plantea importantes complejidades legales sobre el aporte del TPP en cuanto a resolver el *noodle bowl* asiático. También sobre la futura relación del TPP y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), ya que varios países participan simultáneamente en ambos procesos.

El RCEP también puede ser visto como la respuesta de China al TPP. Mientras que el TPP y el RCEP tienen siete países en común, China está solo en el RCEP y EE.UU. solo en el TPP ([Kolsky, 2015](#)).

Un análisis económico comparativo de los países del TPP sugiere que este sería significativo para EE.UU. y podría volverse una plataforma para un área de libre comercio de Asia-Pacífico. No obstante, dada la gran diversidad entre los participantes, es un gran reto lograr estándares altos y comprensivos entre miembros ([Williams, 2013](#)).

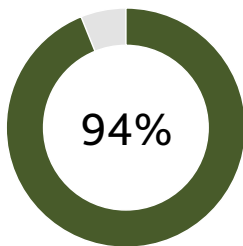
Este artículo presenta una perspectiva desde una economía pequeña y abierta como el Perú, sobre posibilidades y riesgos del mismo.

TPP en la política comercial de Perú

El Perú participa en procesos bilaterales, multilaterales y plurilaterales. No apunta únicamente a consolidar determinados beneficios en países específicos, sino también a ampliar la apertura de mercados integrados para nuestra oferta exportable.

En la actualidad, Perú tiene acuerdos comerciales negociados con 52 países y la participación en el TPP forma parte de un proceso deliberado de apertura. De hecho, el 94% del comercio internacional está amparado por acuerdos vigentes y en negociación. Al respecto, China es el principal mercado de destino, pues ha desplazado a EE.UU. y a la Unión Europea.

Dada la importancia que tiene Asia para Perú, las relaciones con dicho continente se han mantenido bajo particular atención. Primero se ingresó en 1998 al Foro de Cooperación



del comercio internacional de
Perú está amparado por acuerdos
vigentes y en negociación.

Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y luego se suscribieron acuerdos bilaterales con diversos países asiáticos, el más importante con China.

Por otra parte, Perú tuvo un rol clave en el lanzamiento de la iniciativa de la Alianza del Pacífico y ha mantenido un rol muy activo en las negociaciones del TPP como proceso transcontinental en la cuenca del Pacífico.

¿Por qué ingresa Perú al TPP?

Perú anunció su decisión de participar en el proceso de negociación del TPP en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC, efectuada en noviembre de 2008 en Lima. Los países del TPP constituyen un tercio del intercambio comercial de Perú con el mundo. Entre ellos se encuentran EE.UU., seguido de Canadá, Japón y Chile, países que concentran el 92% del total exportado a los países del TPP.

Las 11 economías que participan con Perú en este acuerdo constituyen en conjunto un mercado de 805 millones de personas, el cual es un mercado potencial ya que representa un cuarto de las importaciones totales del planeta, mientras que Perú solo les exporta el 0,25% de lo que compran. Así, se busca ampliar la apertura de mercados integrados a nuestra oferta exportable. El problema es que no está China, nuestro primer socio comercial a nivel global.

También se resalta desde la posición oficial que los acuerdos regionales y bilaterales existentes convivirán con el TPP. Una vez puesto en marcha, el acuerdo creará más oportunidades y exigencias para que Perú se convierta en un puente comercial eficiente entre América del Sur y Asia.

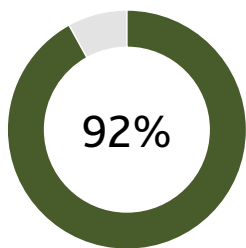
En el corto plazo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que se podrán colocar en Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Malasia y Vietnam alrededor de US\$ 2250 millones adicionales en frutas y hortalizas, granos andinos, productos pesqueros y productos textiles de algodón y alpaca.

“El beneficio fundamental para las PYMEs [pequeñas y medianas empresas] peruanas es la llamada acumulación de origen. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas podrán usar insumos de cualquiera de los 12 países del TPP para que sus productos ingresen a esos mercados con los beneficios del acuerdo, elevando así su competitividad. Así, se permitirá que las PYMEs puedan aprovechar las cadenas de suministro en la región TPP”, refirió el Viceministro Edgar Vásquez (Mincetur, 17/08/15).

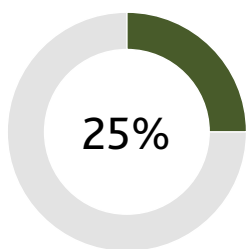
Se reconoce, sin embargo, que para poder aprovechar los beneficios de este acuerdo es necesario avanzar en la agenda de reformas políticas y estructurales. Se debe incentivar la actividad empresarial y facilitar el comercio internacional, invertir en infraestructura de transporte, telecomunicaciones, educación e innovación tecnológica. De esta manera, se busca mejorar los procesos productivos y reducir los costos logísticos del comercio exterior.

Al considerar los acuerdos regionales suscritos, la cuestión es reconocer qué se puede obtener adicionalmente de los países del TPP con los que ya se tienen TLC –los que concentran casi la totalidad de las exportaciones al bloque–, y si las concesiones adicionales justifican la ganancia potencial de la ampliación de nuevos mercados.

En una revisión sobre los impactos del TPP y por lo tanto de los resultados para Perú, las conclusiones son interesantes. En Petri (2012) se presenta un análisis cuantitativo de la integración Trans-Pacífica y Asiática entre 2010-2025, mientras que Li y Whalley (2012) calculan los costos de comercio para China, EE.UU., Japón y otros países del TPP, incluyendo a Perú en uno de los grupos. Ambos documentos muestran que existen grandes ganancias proporcionales para las pequeñas economías como Perú.



del comercio internacional de Perú está representado por EE.UU., Canadá, Japón y Chile, todos países que participan en el TPP.



de las importaciones globales se concentran en las economías TPP. Perú exporta a dichas economías un 0,25% de lo que compran.

En cambio, Narayanan y Kumar Sharma (2014), en un análisis del impacto del TPP en la economía india, incluyendo a Perú, concluyen que para este último los resultados son modestos e incluso pueden llegar a ser negativos.

En acceso a mercados, lo central es la acumulación de normas de origen que teóricamente permitirá consolidar cadenas productivas existentes, así como integrarse a nuevas cadenas globales. El tema es que Perú tendría que hacer concesiones adicionales a las ya otorgadas en diferentes disciplinas. Como señala Carlos Furche (2013), lo que se conseguiría para el caso chileno en mercados es marginal y las concesiones en propiedad intelectual y otras disciplinas serían muy costosas. En ese sentido, la justificación de permanecer en el TPP sería principalmente política: no quedar fuera de la iniciativa liderada por EE.UU.

Cadenas de valor y TPP

Las cadenas globales de valor y sus requerimientos han demandado el desarrollo de acuerdos comerciales de integración profunda. El TPP incluye reglas innovadoras para la gestión eficiente de las cadenas globales de valor. Asimismo, por ser posiblemente el primer mega acuerdo de libre comercio, las reglas contenidas en él podrían convertirse en estándares globales de facto (Nakagawa, 2015).

América Latina ha participado de manera diferenciada en ese proceso. Particularmente importante ha sido cómo México y Centroamérica se han articulado a una de las fábricas mundiales como EE.UU. Sudamérica, en menor grado, y economías como la peruana se han integrado al inicio de la cadena a través de la provisión de minerales y recursos naturales, pero no con valor agregado o avanzando en la misma línea debido a las deficiencias estructurales que presenta en términos de tecnología, infraestructura, tecnologías de la información y otros mecanismos claves para conseguir tal objetivo (UNCTAD, 2013; BID, 2014).

Chile y Perú se han posicionado como exportadores de materias primas a Asia, pero con escaso comercio intraindustrial (Roldan, Castro y Eusse, 2013). No resulta evidente cómo la participación en el TPP podría contribuir a modificar sustancialmente ese patrón, ya que la suscripción de acuerdos comerciales no se acompañó de un énfasis similar en políticas industriales, ni de diversificación productiva y exportadora. En las condiciones actuales, el Perú no sería el más beneficiado en el corto plazo; habría que esperar políticas domésticas que lo hagan posible más adelante.

El TPP también tiene un capítulo sobre pymes y se busca su impulso en el proceso, lo cual es fundamental por su contribución al empleo de las economías participantes, no tanto a sus exportaciones. Sin embargo, hay limitaciones importantes para las economías de América Latina que, en el mejor de los casos, han tenido incorporaciones como proveedores a grandes empresas exportadoras nacionales que exportan a cadenas principalmente regionales (SELA, 2012).

Además, ese ciclo de crecimiento exportador y el auge de cadenas de valor parece haber llegado a su fin, pues se abre un nuevo escenario donde se esperan condiciones más complicadas en el entorno internacional necesarias para el éxito de tal estrategia. Este fenómeno parece trascender la actual coyuntura y adquirir rasgos estructurales.

Perú: intereses defensivos y críticas

Para Mincetur, los opositores al TPP concentran sus críticas en dos temas: propiedad intelectual y controversias inversionista-Estado, y busca refutarlos de la siguiente manera:

Tabla 1. Impactos de temas específicos del TPP en Perú

Propiedad Intelectual	
Patentes	<p>No afecta el acceso de los peruanos a medicamentos, pues al definirse las obligaciones en materia de patentes, el mercado peruano será más atractivo para productores especializados. El TPP tampoco impedirá la fabricación de medicamentos genéricos por involucrar su política de salud pública.</p> <p>El Perú mantendrá el sistema actual de patentes, incluidas las farmacéuticas. Es decir, el plazo de protección será de 20 años, tal como se estableció en la Comunidad Andina en el 2000. No se cederá más de lo estipulado en el TLC con EE.UU.</p>
Productos biológicos	Una adecuada protección de datos de prueba de productos biológicos constituiría un incentivo para el pronto ingreso de los mismos al mercado peruano, aunque se ha planteado establecer una protección para los productos biológicos.
Internet	<p>Los compromisos no restringirán la libertad de los usuarios en Internet. No se establecen obligaciones mayores a las ya consideradas en el TLC con EE.UU.</p> <p>Incluye disposiciones que permiten establecer excepciones y limitaciones a tales obligaciones que dejan espacio para el desarrollo de políticas internas con relación al acceso a la información.</p>
Datos de prueba	La protección de los datos de prueba da mayores garantías a los innovadores, pues constituye un incentivo para que llegue al Perú la adecuada cantidad de medicamentos de última generación, lo que alimentaría el círculo virtuoso de la innovación farmacéutica.
Conocimientos tradicionales	La protección de la propiedad intelectual en el marco del TPP ayudaría a combatir la biopiratería y a desarrollar productos sobre la base de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
Inversionista-Estado	
Solución de controversias	<p>El Estado peruano no está aceptando ningún mecanismo nuevo de solución de controversias.</p> <p>El Perú viene negociando diversas salvaguardas dentro del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado del TPP con el fin de contar con los mecanismos adecuados que permitan articular una defensa ante el supuesto de que medidas relacionadas con la salud, la seguridad y el medio ambiente sean cuestionadas en un arbitraje internacional.</p>
Defensa comercial	Perú podrá seguir aplicando mecanismos de defensa comercial. Asimismo, el capítulo de Defensa Comercial del TPP incluye mecanismos de salvaguardia ante incrementos súbitos de las importaciones que causen o amenacen causar daño a la industria peruana. El TPP no deja desprotegida a la industria nacional.

Fuente: *Mincetur, 2015.*

Para autores como Furche (2013), las propuestas en discusión plantean la incorporación de nuevas disciplinas y estándares en varios de los capítulos y áreas de negociación de mayor sensibilidad para países en desarrollo: propiedad intelectual, coherencia regulatoria, derechos digitales, movimiento de capitales, asuntos laborales y medio ambiente. Estos capítulos reflejan las prioridades de la agenda de los socios dominantes en esta negociación, particularmente de EE.UU., que procura reabrir los capítulos negociados en sus acuerdos bilaterales y obtener concesiones adicionales.

En el capítulo de propiedad intelectual se plantearía que las políticas de comercio y medio ambiente deben ser de mutuo apoyo, afirma la importancia de la captura del comercio ilegal de fauna y flora silvestre ya que socava los esfuerzos para conservar y gestionar sosteniblemente dichos recursos naturales. Se adoptarían medidas que deberían incluir sanciones o penas según el nivel de violación sobre la base de pruebas como elemento disuasorio para dicho comercio, transbordo o transacción ([Wikileaks, 15/01/2014](#)).

Un tema que ha suscitado controversia es la propuesta de EE.UU. de establecer sanciones penales para la falsificación intencional de marcas y la piratería de derechos de autor que ocurran en una "escala comercial", incluso si ello no resulta en una ganancia financiera directa o indirecta. También se aplicarían a la exportación de etiquetas y empaquetados falsificados y las grabaciones en los cines ([Rosales, Herreros, Frohmann, 2013](#)).

TPP y el desarrollo sostenible

Según [Leal-Arcas y Wilmarth \(2014\)](#), el capítulo ambiental del TPP ha demostrado una falta de claridad respecto al ambiente y la sostenibilidad. Se piensa que el principal propósito del TPP es la liberalización del comercio y la protección de la inversión y por lo tanto hay un menor énfasis en el ambiente y la sostenibilidad.

Los acuerdos preferenciales de comercio con estándares ambientales pueden ayudar a nivelar el campo de juego, anulando las ventajas competitivas ganadas con legislaciones ambientales laxas, pero pueden ser considerados para países en desarrollo como nuevas barreras a las exportaciones, generando conflictos y una fragmentación regulatoria. ([Leal-Arcas y Wilmarth, 2014](#)).

En general, los compromisos que los países realizan bajo el TPP en los capítulos ambientales no son la única forma mediante la cual el acuerdo pueda afectar la salud ambiental. De hecho, la liberalización del comercio combinado con nuevas reglas del TPP puede reforzar y ayudar a alcanzar un rango de metas ambientales. Esto dependerá del tipo de crecimiento económico que le siga.

Si el libre comercio provee un aumento del acceso y competencia entre proveedores de servicios, esto puede implicar un cambio en la economía lejos de la industria pesada y con ello un menor daño ambiental. Asimismo, reducir las tarifas en bienes ambientales podría apoyar los esfuerzos domésticos hacia la conservación ambiental.

El compromiso de las partes del TPP para el uso de etiquetas y estándares comunes para informar a los consumidores de los beneficios ambientales de bienes particulares podría reducir los costos y debería aumentar el comercio de bienes ambientales ([Meltzer, 2014](#)).

Se reconoce la importancia del comercio y las inversiones en bienes y servicios ambientales como un medio para mejorar el desempeño ambiental y económico y abordar los problemas ambientales mundiales. Cada parte tiene limitada sus restricciones de comercio en servicios ambientales de acuerdo a los capítulos de inversión, comercio transfronterizo de servicios y entrada temporal de personas por negocios. Se podrán desarrollar proyectos bilaterales y plurilaterales de cooperación sobre bienes y servicios ambientales ([Wikileaks, 15/01/2014](#)).

Asimismo, existen propuestas que incorporan sanciones comerciales, lo que puede abrir paso a tendencias proteccionistas bajo el pretexto de preocupaciones ambientales. La coherencia regulatoria parece a priori positiva, pero existe el riesgo de establecer compromisos que limiten significativamente la autonomía del país para definir regulaciones en áreas relevantes y en temas muy diversos, vinculados a la producción de bienes y servicios, asuntos ambientales y laborales, entre otros ([Furche, 2013](#)).

Los capítulos ambientales y laborales ratificarían en buena medida lo que ha suscrito EE.UU. en sus TLC bilaterales, por lo que la principal controversia estaría con los socios del TPP que aún no tienen dichos acuerdos.

De acuerdo a Mincetur, el TPP contará con altos estándares, por ejemplo, en materia laboral, ambiental y de política de competencia. Países como Vietnam y Malasia, que tienen una amplia fuerza laboral pondrán sus estándares laborales a la par con los del Perú y demás países. Permitirá, además, combatir el llamado "*dumping* social" que vuelve artificialmente competitivas las exportaciones de países con menores estándares laborales. Debe subrayarse que, a raíz de la firma del TLC con EE.UU., Perú ya ha implementado políticas laborales dirigidas a fortalecer los derechos de los trabajadores.

Por último, y siguiendo a Mincetur, el TPP abrirá a los proveedores y empresarios peruanos los mercados de compras públicas de los países miembros del acuerdo, de forma que podrán participar en mejores condiciones que los proveedores de terceros países en los procesos de contratación pública de bienes y servicios.

No obstante lo anterior, hay diversas críticas no por los estándares que deben ser considerados a partir de la suscripción o reconocimiento de diferentes tratados internacionales ambientales y de la Organización Internacional del Trabajo, sino por las sanciones comerciales que se tomarían por su incumplimiento.

El problema no es tanto que se trate de una estrategia deliberada de competencia desleal en base a rebajar estándares para tener acceso a mercados (*dumping* social). El tema central es la baja productividad y condiciones precarias de buena parte de las pequeñas y medianas empresas que se ven en la imposibilidad de cumplir con tales estándares, lo que traería graves perjuicios potenciales al país.

Balance

La mayor importancia de un mega acuerdo como el TPP implica una definición estratégica sobre todo en la futura relación con China (salvo que este país se incorpore al mismo).

En general, los beneficios para el Perú a nivel comercial pueden no ser muy altos dados los TLC firmados con varios de los socios. En este sentido, el principal factor para definir la participación de Perú, como señala Furche (2013) para Chile, sería el costo político de quedar fuera de una negociación del siglo XXI.

Es poco probable que la acumulación de normas de origen se pueda aprovechar en el corto plazo para cambiar cualitativamente nuestra inserción en las cadenas globales de valor debido a las limitaciones estructurales que presenta la economía peruana y sus pymes.

Otro aspecto a considerar son los altos estándares regulatorios para el país. Dicha exigencia no es negativa en sí mismo, por el contrario, puede ayudar a la competitividad del país y su desarrollo institucional. Sin embargo, si se mantienen los contenidos analizados en el texto final del acuerdo, en caso de incumplir con estos, las sanciones, y con ello los costos, pueden ser muy elevados para el país. Tal es el caso de los sectores sensibles como propiedad intelectual, así como en los capítulos que hacen referencia al desarrollo sostenible.



Alan Fairlie Reinoso

Profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

ALIANZA DEL PACÍFICO

Chile y la Alianza del Pacífico

María del Carmen Domínguez

Chile está comprometido con la integración regional, por lo que asigna gran relevancia a la Alianza del Pacífico. La iniciativa ha logrado notables avances, tanto a nivel intrarregional como en la construcción de un mayor diálogo entre bloques regionales, buscando la convergencia en la diversidad. Si bien existen desafíos y tareas pendientes, la Alianza es una iniciativa con amplia proyección para el logro del desarrollo y de la cohesión social de sus países miembros.

Chile tiene un compromiso con la integración regional desde los años sesenta, cuando fuimos signatarios del Tratado de Montevideo (1960), el mismo que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, hoy la Asociación Latinoamericana de Integración (1980), así como del Pacto Andino. Ambas fueron iniciativas iniciales de integración económica para el desarrollo de los países latinoamericanos.

Desde entonces, Chile es consciente de los beneficios de estrechar lazos con otras naciones dentro y fuera de la región, pues ello conlleva crecimiento económico, así como desarrollo político y social. No obstante, no fue sino hasta el retorno de la democracia en Chile y en países vecinos que las condiciones se dieron para avanzar en procesos de integración.

Hoy, en un mundo de bloques, la importancia de la integración regional es aún mayor que en el pasado, en particular en el caso de países de tamaño medio como Chile, con un alto nivel de integración en los mercados globales, pero que enfrentan constantes cambios y desafíos. Solo basta mencionar las profundas transformaciones tecnológicas en los procesos productivos, la volatilidad de los mercados, el auge de las cadenas globales de valor o el surgimiento de las amenazas no convencionales como grupos terroristas, cuyas acciones impiden el tránsito de bienes y servicios, para comprender que juntos se tiene mayor capacidad para reaccionar y responder que de manera individual.

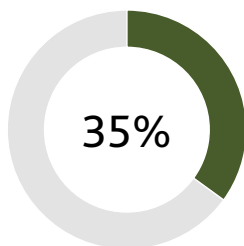
Es dicho contexto, Chile promueve la integración sobre la base de iniciativas pragmáticas, compromisos realistas, planes de acción claros y concretos y respaldados por voluntad política. La Alianza del Pacífico, creada en el 2011, cumple cabalmente con estos criterios. Chile, Perú, Colombia y México son países con economías sanas y equilibradas, con regímenes comerciales abiertos y buenos indicadores sociales y macroeconómicos. Los cuatro países han firmado acuerdos de libre comercio entre ellos, todos con altos niveles de ambición y cobertura, además de contar con una amplia red de acuerdos comerciales con el resto del mundo.

Estrechando vínculos: los avances de la Alianza del Pacífico

En términos numéricos, los cuatro países del bloque representan, en conjunto, la novena economía más grande del mundo por producto interno bruto (PIB) y la sexta más dinámica. Con 214 millones de habitantes, la Alianza del Pacífico constituye el 35% de la población de América Latina y la quinta economía con mayor población del mundo, detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

De igual manera, el PIB por habitante en la Alianza fue cercano a los US\$ 13 mil en 2013. La tasa de desempleo, de acuerdo a la propia Alianza del Pacífico, en los países miembros es alrededor del 8%, mientras que la inflación está alrededor del 3,2%. A pesar de las diferencias cuantitativas entre los países, por ejemplo en términos de población, comparten una visión sobre cómo enfrentar los retos actuales.

Detrás de la decisión de lanzar esta iniciativa hay una constatación clara de los actuales y crecientes desafíos económicos: una economía global que no logra sobreponerse a la crisis del 2008-2009; una China que ya no crece a las altas tasas de hace algunos años; un descenso en la demanda de *commodities* y una baja en sus precios, entre otros factores de presión.



de la población de América Latina está concentrada en los países de la Alianza del Pacífico, lo que constituye la quinta economía con mayor población del mundo, detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

En los últimos 15 años, países como Chile han aumentado la exportación de recursos naturales a China, lo que ha traído bonanza, pero también vulnerabilidad. La reciente depreciación de la moneda china –la más grande de los últimos años en dicho país– trae además mayor volatilidad financiera a nivel global y ha subrayado la necesidad de una mayor diversificación de la oferta exportadora, de aprovechar mejor las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio (TLC) y de explorar nuevas oportunidades comerciales tanto a nivel regional como extrarregional.

En este contexto, la decisión de los cuatro países miembros de promover el comercio y las inversiones entre ellos e interactuar de manera conjunta con los mercados dinámicos del Asia-Pacífico cobra aún mayor valor.

La brevedad y claridad de la declaración conjunta inicial demostró el anhelo de los cuatro miembros por avanzar en forma pragmática. El objetivo de la Alianza del Pacífico es lograr una "integración profunda" de las cuatro naciones mediante la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Esta integración no se basa solo en las preferencias arancelarias ni apunta a una unión aduanera propiamente, sino que busca la armonización de políticas, normas y estándares nacionales fundamentales para el buen funcionamiento de las cadenas regionales de valor.

Cabe recordar que cada uno de los cuatro países miembros ya cuenta con acuerdos de libre comercio que constituyen el punto de partida para la futura liberalización. En paralelo, se busca fortalecer los vínculos comerciales con todos los países, pero en particular con los del Asia-Pacífico. Con ello, se creará una plataforma atractiva para empresarios e inversionistas tanto a nivel regional como extrarregional.

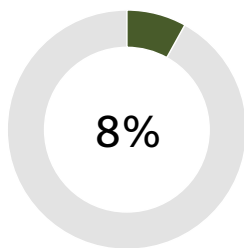
La meta final es lograr competitividad y un crecimiento económico sostenido mediante el aumento del comercio intrarregional y extrarregional. Esta visión es consistente con la política de Chile de hace más de veinte años de convertirse en un país puerto hacia Asia-Pacífico, así como un puente entre los mercados del Pacífico y del Atlántico dada su posición geográfica.

Durante sus primeros cuatro años, la Alianza del Pacífico, ha tenido logros importantes y se ha consolidado como un mecanismo de integración regional estable, dinámico e innovador. Un gran hito ha sido la entrada en vigencia el 20 de julio de este año del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito el 6 de junio de 2012 por los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, documento que contiene su visión, objetivos y estructura, así como el marco para su relacionamiento externo.

Otro gran avance es la suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, el cual permitirá, tras su entrada en vigor que el 92% de los productos que se comercian entre los cuatro países queden libres de aranceles; el 8% restante se desgravará progresivamente. El Protocolo contiene un capítulo sobre facilitación del comercio, disposiciones sobre solución de diferencias y compromisos en compras gubernamentales a nivel central y sub-central. El Protocolo está en proceso de tramitación en los Parlamentos de los cuatro países miembros. En Chile, este se encuentra en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Se espera que a fin de este año esté aprobado.

En otros ámbitos, y siguiendo a la *Declaración de Cali*, se han eliminado las visas para los ciudadanos de los cuatro países miembros y a la fecha suman 855 estudiantes quienes han aprovechado la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica para avanzar en sus estudios en los países de la Alianza. Asimismo, se han abierto embajadas y oficinas comerciales conjuntas en terceros países.

Se ha profundizado además la circulación de flujos de los mercados de capitales mediante la creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), al cual se unió la Bolsa Mexicana de Valores en diciembre de 2014. Esta iniciativa, al igual que otras, ha sido fomentada por el sector privado de los cuatro miembros, quienes integran el Consejo



es la tasa de desempleo estimada de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y son actores fundamentales en este proceso de integración.

Hay 42 países que son observadores, varios de ellos con interesantes proyectos de cooperación. Entre ellos, se pueden mencionar varios de la región, incluyendo a Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala que, incluso, han indicado interés en eventualmente ser Miembros plenos. Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay son otros observadores en América Latina.

Finalmente, se han realizado reuniones entre representantes de la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean; 25 de mayo de 2015) y del Mercado Común del Sur (Mercosur; 1 y 24 de noviembre de 2014); encuentros que abren espacios de integración y diálogo respecto a una agenda de trabajo sobre temas de interés común.

Un progreso continuo

En la reciente Cumbre de Paracas en julio del 2015 Chile valoró varios avances. Primero, la negociación del Primer Protocolo Modificadorio del Acuerdo Marco, que incluye un capítulo de mejoras regulatorias, un anexo sobre obstáculos técnicos al comercio en el sector de cosméticos y nuevas normas en los capítulos de telecomunicaciones y comercio electrónico del Protocolo Adicional, lo que incentivará un mayor comercio intrarregional. A su vez, instó a los miembros a concretar la segunda parte de la tarea, lograr una mayor proyección hacia el Asia-Pacífico –la región del futuro– y valoró el avance realizado por los 19 grupos de trabajo, así como sus nuevos mandatos.

Segundo, reconoció el creciente número de países observadores, así como la alianza estratégica con Canadá y la propuesta de acercamiento presentado por Nueva Zelandia, que propuso negociar un TLC con la Alianza del Pacífico o ser miembro pleno del bloque. A la vez, estimó como altamente positivo el diálogo directo que se está construyendo con otros bloques regionales como es Asean.

En la Cumbre de Paracas se decidió que un grupo con integrantes de los cuatro países analizará las propuestas de los países observadores a fin de definir mecanismos de participación. También se buscarán nuevas oportunidades de acercamiento a iniciativas de integración en el Asia-Pacífico.

Otro tema importante para Chile fue la creación del grupo de trabajo que buscará cómo incluir el enfoque de género de manera transversal dentro de la Alianza. Un área de especial interés es la promoción de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en particular aquellas creadas por mujeres emprendedoras, pues existe una serie de barreras que evitan que puedan entrar al mercado. Este es un problema en Chile, pero también es un desafío compartido por todos los miembros de la Alianza.

Asimismo, resulta esencial el fortalecimiento del capital humano en el caso de la mujer, pues es un desafío común el logro de niveles de educación y calificación igualitarios entre hombres y mujeres. Esta situación, al igual que muchas otras, podrán ser identificadas y enfrentadas mediante un diagnóstico y medidas apropiadas.

Chile también valoró el progreso en la integración financiera, donde también hay mucho por hacer. Un tema relevante para Chile es la adopción de un nuevo mandato sobre la portabilidad de los fondos de pensión. Chile y Perú ya han logrado acuerdos en este ámbito y se pretenden extender estos beneficios a toda la Alianza. Ello no solo impulsará una mayor movilidad de personas, sino que ayudará a asegurar que nuestros ciudadanos puedan trabajar en nuestros países con la seguridad de que contarán con una jubilación digna.

De especial interés para Chile es la convergencia en la diversidad que podamos lograr con Mercosur sobre la base de aquellos temas de interés común que facilitarán nuestro intercambio. A pesar de las diferencias en modelos de desarrollo, Chile estima que hay

ámbitos en los cuales la Alianza del Pacífico y Mercosur pueden trabajar de manera conjunta, por ejemplo, en la facilitación del comercio o la conectividad física y virtual.

Todas estas acciones favorecerán el dinamismo del comercio y de las inversiones de nuestros países, consolidando una voz clara y proactiva en América Latina. Ello nos ayudará a pararnos mejor frente al Asia-Pacífico y entrar a sus mercados de forma conjunta.

Desafíos y tareas pendientes

Ciertamente, la Alianza del Pacífico enfrenta algunos desafíos. Aún hay mucho por hacer para aumentar el comercio y la inversión intrarregional, incluyendo los servicios, que son un área de crecimiento y de fomento para varias multilaterales, como Latam, Telmex o Cencosud.

Se tienen que buscar espacios para articular cadenas regionales de valor entre los cuatro miembros para que puedan exportar de manera competitiva a terceros mercados, aprovechando las ventajas productivas de cada país, la eliminación de los aranceles y las estrategias de promoción conjuntas. En esa tarea, el sector empresarial puede jugar un rol clave de identificación de posibles sectores.

Por otro lado, en virtud del interés demostrado hay que definir si se deben consolidar los avances entre los cuatro miembros y aprobar los acuerdos ya suscritos antes de abrirse a nuevos miembros. También se debe analizar la necesidad de crear nuevas categorías de observadores, pues los niveles de interés o de eventual compromiso difieren bastante. Estos temas serán centrales en el debate en la próxima reunión del Grupo de Alto Nivel, que tendrá lugar en Chile a mediados de octubre.

En paralelo, es importante adoptar estrategias claras respecto a iniciativas regionales como Asean o ante negociaciones con países del Asia-Pacífico, así como determinar las posibles líneas de acción con los países de Mercosur. Una señal en este sentido fue el diálogo que sostuvieron los ministros de la Alianza y de Asean en septiembre del año pasado, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Otro encuentro de provecho entre representantes de Asean y la Alianza se dio en mayo de este año, ocasión en la cual se intercambiaron puntos de vista sobre cómo fortalecer la cooperación económica para facilitar el comercio y los flujos de inversión, abordándose temas como innovación, minería, logística y pequeñas y medianas empresas, entre otros. Se esperan nuevas reuniones para el segundo semestre de 2015, incluyendo un encuentro con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en noviembre de este año en Filipinas.

Aun con estos retos, no debemos olvidar que esta iniciativa, a pesar de su corta edad, ha logrado importantes avances que benefician tanto a empresarios y emprendedores, como a estudiantes y turistas. Se puede tener confianza en el futuro de la Alianza del Pacífico, pues ha sido construida sobre los sólidos cimientos de apertura comercial, una buena relación público-privada, inversiones recíprocas y, lo más importante, voluntad política de los cuatro países para avanzar hacia una integración regional económica y política que rinda frutos para todos.



María del Carmen Domínguez
Directora de Planificación
Estratégica del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.

PESCA Y MEDIO AMBIENTE

Herramientas comerciales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no regulada

Margaret A. Young

¿Qué herramientas comerciales están utilizándose para terminar con las actividades del mercado negro pesquero? ¿Cómo pueden usarse de manera más efectiva? El siguiente artículo aborda esta y otras cuestiones ligadas a la pesca ilegal no declarada y no regulada.

La pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR) es un problema mayúsculo que impacta a la economía y al medio ambiente en todo el mundo. La pesca INDNR, ligada comúnmente a la piratería pesquera o al fraude en el mercado de productos del mar, se define en términos generales como aquella que viola las leyes de pesca internacionales, regionales o nacionales sobre ordenación, conservación y declaración.¹

La pesca INDNR, además de contribuir a la crisis ecológica mundial de sobrepesca y agotamiento de biodiversidad, afecta a la pesca legítima y a sus medios de sustento, pone en riesgo la seguridad alimentaria, consolida el crimen transnacional, distorsiona los mercados y debilita los intentos de implementación de políticas de pesqueras sostenibles.

Una efectiva supervisión de las normas y la implementación de medidas que aborden estas prácticas resultan esenciales para evitar los graves efectos que la pesca INDNR tiene para las formas de subsistencia presentes y futuras, los que se extienden más allá del ámbito pesquero y comprometen el equilibrio ecológico. Para resolver dichos problemas son importantes las medidas que impongan documentación, certificación o requisitos de rastreo de importación de forma más rigurosa, que regulen el transbordo o prohíban el comercio de productos pesqueros relevantes.

Al igual que sucede con las principales políticas regulatorias, es probable que dichas medidas afecten las actuales condiciones comerciales entre países, muchos de ellos integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

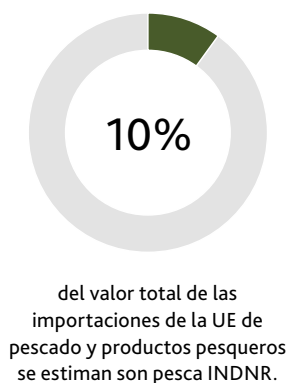
En este contexto, el presente artículo ofrece un análisis legal comparativo de las medidas e iniciativas que se han implementado, e incluye recomendaciones para los gobiernos, organizaciones internacionales, actores privados y, en general, para todos los miembros de la comunidad internacional que busquen tomar acciones en esta área.

El desafío de la pesca INDNR

El combate a la pesca INDNR ha sido parte de la agenda de los países y sus partes afectadas, especialmente dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros foros como la Asamblea General de las Naciones Unidas (véase [A/RES/68/71](#) y [A/RES/69/109](#)).

La pesca INDNR incluye una amplia variedad de actividades. Según la definición de la FAO, la pesca INDNR se considera "ilegal" cuando contraviene las leyes y regulaciones que rigen sobre las aguas incluidas en la jurisdicción de algún país costero o aquellas áreas ajenas a las jurisdicciones nacionales conocidas como alta mar o cuando violan las medidas de conservación y gestión requeridas por organizaciones relevantes de ordenación pesquera o convenciones internacionales.

Se considera "no declarada" cuando no cumple con procedimientos de declaración pertinentes, entre ellos la compilación y seguimiento de datos y cuotas. Y se considera "no regulada" cuando se hace con naves sin nacionalidad o que navegan con la bandera de un país externo a una organización regional de ordenación pesquera (OROP) pertinente.



La pesca INDNR es combatida a través de una variedad de mecanismos legales y de gestión a nivel internacional, regional y nacional. Dichos mecanismos se centran en el seguimiento, control y vigilancia, en la regulación de desembarcos en países portuarios (también a través del Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto), en las obligaciones de los países que autoricen o "abanderen" barcos pesqueros y en la asignación de derechos pesqueros.

Comercialización de pescado proveniente de pesca INDNR

Se calcula que las pérdidas globales atribuidas a los productos de pesca INDNR oscilan entre los US\$ 10 y US\$ 23 mil millones al año, equivalentes a una cantidad entre 11 y 26 millones de toneladas (Agnew et al., 2009). Estimaciones recientes revelaron que la pesca INDNR constituye entre 13% y 31% de la pesca declarada y más de 50% en algunas regiones, siendo las regiones del Sudeste Atlántico, el Pacífico Centro-Oriental y el Pacífico Sudoriental en donde más se generan productos para la pesca INDNR.

Los productos obtenidos a partir de la pesca INDNR suelen comercializarse y transportarse entre múltiples jurisdicciones y la cadena de suministro que liga a productores, procesadores, minoristas y consumidores finales puede resultar considerable.

De hecho, uno de los destinos más importantes es Estados Unidos. Se calcula que entre un 20% y un 32% de los productos del mar importados a Estados Unidos son ilegales. Estos llegan gracias a oscuras cadenas de suministro como el reprocesamiento chino y fuentes ilegales y no declaradas de pescado de países como Tailandia (Pramod et al., 2014).

"La pesca INDNR, además de contribuir a la crisis ecológica mundial de sobrepesca y agotamiento de biodiversidad, afecta a la pesca legítima y a sus medios de sustento, pone en riesgo la seguridad alimentaria, consolida el crimen transnacional, distorsiona los mercados y debilita los intentos de implementación de políticas de pesqueras sostenibles."

Posibles herramientas comerciales

Una variedad de medidas comerciales para restringir el acceso al mercado a productos provenientes de la pesca INDNR ha surgido de foros regionales –tales como las OROP–, de desarrollos legales unilaterales –como la Normativa de la Unión Europea (UE) sobre la Pesca INDNR– y de tratados multilaterales –como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés).

Documentación para la pesca

Entre las medidas comerciales para combatir la pesca INDNR destacan los esquemas de documentación de pesca. La Normativa de la UE sobre Pesca INDNR utiliza un esquema de certificación para asegurar la efectividad de la prohibición a la importación de productos obtenidos por pesca INDNR que entren a la UE.

El certificado contiene datos como el nombre de la embarcación, el número de licencia de pesca, la bandera del país, descripción y fecha de la pesca y el peso estimado de productos pesqueros en cada desembarco, transbordo e importación hacia la UE. También exige que las autoridades competentes del país cuya bandera porte el barco pesquero certifiquen que la pesca se haya realizado bajo las leyes, normas y medidas internacionales de ordenación y conservación.

Entre las OROP, uno de los esquemas de documentación de pesca más valorados es el de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Algunos de los 24 integrantes de la CCRVMA, que incluye a la UE, son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Desde la década de 1990, la CCRVMA ha buscado combatir la pesca INDNR de merluza negra de la Patagonia con una variedad de procedimientos de conservación, programas de seguimiento y un esquema de documentación de pesca que requiere la especificación del nombre de la embarcación, número de licencia, ubicación, fecha de la pesca y peso neto de todos los embarques, transbordos e importación de merluza negra a los países miembros de la CCRVMA.

En el plano multilateral, los países integrantes de Cites han acordado requerimientos aduaneros similares a los esquemas de documentación de pesca como medio de implementación de su acuerdo para restringir el comercio de las especies registradas en peligro de extinción.

En el contexto de las pesqueras, los integrantes de Cites buscan incluir especies marinas en el grupo que está en peligro de extinción, a pesar de la oposición de los grupos de pesca comercial de algunos países. Aunque Cites no se enfoca en combatir la pesca INDNR, sus integrantes podrían estar de acuerdo en que algunas especies explotadas comercialmente podrían agregarse a la Convención, luego de lo cual cualquier forma de comercio o producto del mar estaría sujeto a un permiso estricto y a un sistema de autorización certificada operado por autoridades nacionales.

La OMC, por su parte, exige a sus integrantes que se aseguren de que las medidas comerciales no sean discriminatorias. No solo eso, si los esquemas de documentación de pesca se suman a las reglamentos técnicos bajo la normativa OMC relativa al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) no deberían diseñarse con la idea de crear obstáculos innecesarios para cumplir con un objetivo legítimo.

En el Acuerdo OTC existe una larga lista de objetivos legítimos que se alinean al propósito de los esquemas de documentación de pesca, entre ellos "los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente".

Requerimientos de trazabilidad

Por su dependencia al despliegue de información, los requerimientos de trazabilidad como aquellos desarrollados para tratar la seguridad alimentaria son similares a los esquemas de documentación de pesca. El almacenamiento electrónico de datos y los desarrollos científicos y tecnológicos vinculados a la identificación genética de los productos facilitan la trazabilidad. La Normativa de la EU sobre Pesca INDNR, por ejemplo, "busca asegurar una trazabilidad total" de los productos de pesca comercializados con la UE a través de su esquema de documentación de pesca.

En Estados Unidos, la Fuerza de Trabajo Presidencial para Combatir la Pesca INDNR y el Fraude en el Mercado de Productos de Mar propuso incrementar la cantidad de información disponible sobre productos del mar valiéndose de requisitos de trazabilidad adicionales. Además, mientras la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) reúne información sobre la identidad de productos del mar importados, las propuestas buscan coordinar los esfuerzos de diversas agencias importantes para la pesca y el comercio. Inicialmente aplicaría para las especies "en riesgo", pero también intentaría poner a disposición del consumidor final cierto tipo de información como especies, origen geográfico, medios de producción y tipo de pesca.

Si la diversidad de condiciones en las diferentes pesqueras y regiones llevan a una aplicación desigual de los requerimientos de trazabilidad, esto debe ser explicado. Por ejemplo, bajo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio el tratamiento diverso podría considerarse necesario para proteger la moral pública, la vida y salud de

animales y plantas, para asegurar el cumplimiento con las leyes nacionales importantes, o incluso porque se relaciona con la preservación de recursos naturales agotables.

Además, como sucede con los esquemas de documentación de pesca, los requerimientos de trazabilidad podrían considerarse "reglamentos técnicos" bajo el Acuerdo OTC. De ser así, habría que fijarse en que las medidas no creen barreras técnicas al comercio injustificables. También es necesaria una mayor atención a la pregunta sobre cómo se relacionan las medidas públicas que aseguran la trazabilidad con los esquemas privados de estandarización, certificación y etiquetado.

Listas de barcos y prohibición a las importaciones

Los esquemas para identificar productos procedentes de pesca INDNR dependen mucho de las listas de barcos. Las listas negativas o "negras" sirven para identificar a los barcos que cometen violaciones. Las listas positivas o "blancas", por su parte, obligan a los países participantes a permitir que solo los barcos con "buena reputación" desembarquen o transborden sus capturas.

Según la Normativa de la UE sobre la Pesca INDNR debe prohibirse el comercio de productos del mar obtenidos por pesca INDNR. Esto se logra con un esquema de certificación de pesca que aplique a todos los productos del mar comercializados y con una lista negativa.

"Los productos obtenidos a partir de la pesca INDNR suelen comercializarse y transportarse entre múltiples jurisdicciones y la cadena de suministro que liga a productores, procesadores, minoristas y consumidores finales puede resultar considerable. De hecho, uno de los destinos más importantes es Estados Unidos. Se calcula que entre un 20% y un 32% de los productos del mar importados a Estados Unidos son ilegales."

La Comisión Europea trabaja con los países integrantes, terceros y otros organismos para identificar los barcos pesqueros sospechosos de realizar pesca INDNR. Si con tales investigaciones se encuentra que un barco ha llevado a cabo pesca INDNR y que el país cuya bandera representa no ha tomado acciones efectivas, la Comisión incluirá al barco en una lista especial de navíos que practican pesca INDNR.

También de forma bilateral, la referencia a las listas de barcos responsables de pesca INDNR aparece en los acuerdos de los países que buscan entrar a la zona económica exclusiva de otro país. El acuerdo de sociedad de pesqueras entre la UE y Marruecos, por ejemplo, establece procedimientos cooperativos y disposiciones para la concesión de licencias que prohíben barcos que han aparecido enlistados legalmente como pesqueros INDNR.

Estados Unidos, por su parte, permite en ciertas circunstancias la prohibición unilateral de pescado importado de países que practiquen la pesca INDNR. La legislación pertinente le exige al Secretario de Comercio, mediante un reporte bianual al Congreso, mencionar a los países cuyos barcos pesqueros practiquen o hayan practicado pesca INDNR en los dos años anteriores.

Colombia, Ecuador y México han sido señalados en los reportes de 2013 y 2015 como países que han tenido embarcaciones involucradas en pesca INDNR, lo que implica que deben entablar consultas con Estados Unidos a fin de abordar las violaciones pertinentes.

En caso de no obtener la certificación correspondiente, estos países podrían estar sujetos a prohibiciones comerciales o denegación de los privilegios de puerto por parte de Estados Unidos.

Debe mencionarse que las listas de barcos pesqueros aumentan gracias a la cooperación entre agencias pertinentes. Esto concuerda con los requerimientos de leyes comerciales que enfatizan la necesidad de procedimientos claros y transparentes para asegurar que no exista discriminación arbitraria o injustificable o restricciones encubiertas al comercio internacional.

Es más, las medidas para reunir listas de barcos y restringir la importación de productos provenientes de pesca INDNR son compatibles con el Plan Internacional de Acción para prevenir pesca INDNR de la FAO, bajo el cual los países acordaron "adoptar todas las medidas compatibles con el derecho internacional que sean necesarias para impedir que el pescado capturado por embarcaciones cuya práctica de la pesca INDNR haya sido determinada por la organización regional de pesca competente se comercialice o importe en su territorio".

Además del uso actual o propuesto de la documentación, trazabilidad y medidas de prohibición de importaciones al mercado, existe una amplia variedad de mecanismos para combatir la pesca INDNR que tienen una dimensión comercial, entre ellos los juicios nacionales a los importadores por sus violaciones comerciales, reformas a las reglas de subsidios y áreas marinas protegidas.

Las iniciativas privadas también son cada vez más importantes. Los grupos industriales, por ejemplo, han buscado retirar los productos de pesca INDNR de la cadena de suministro a través de arreglos voluntarios como el documento de control de compras de la Asociación Europea de Comerciantes y Procesadores de Pescado que se presentó para pescado blanco del mar de Barents en 2006 y que ahora se usa en otros esquemas privados y OROP. Los programas voluntarios para la certificación de pesqueras sustentables, como la *Marine Stewardship Council* e iniciativas de ecoetiquetado también limitan la pesca INDNR.

Recomendaciones

Este artículo ha demostrado que los enfoques actuales para combatir la pesca INDNR dependen cada vez más de los métodos que garantizan la información sobre la procedencia del producto, que incluye documentación de pesca o requerimientos de trazabilidad; la identificación y evaluación de los barcos que practican la pesca INDNR; el bloqueo al acceso portuario y al desembarco; y la prohibición a las importaciones, transbordos de producto o comercialización de productos del mar.

Teniendo en cuenta que los intentos por combatir la pesca INDNR deben desarrollarse de acuerdo al derecho internacional, en particular con los acuerdos establecidos bajo la OMC, el presente artículo concluye con las siguientes recomendaciones.

En primer lugar, las medidas comerciales unilaterales identificadas en el presente texto, como el esquema de documentación de pesca y de prohibición de importación de la UE, parecen haberse diseñado para asegurar que sean justos, transparentes y no discriminatorios, esto incluye a países de la UE y ajenos a la UE. El objetivo del combate a la pesca INDNR es compatible con los objetivos legítimos expresamente reconocidos en las leyes comerciales, como los requerimientos de seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error y otras mencionadas anteriormente.

La implementación de dichas medidas deberá seguir la misma línea y es importante mencionar que las prohibiciones a la importación están precedidas por el uso de medidas menos restrictivas al comercio, para que estas se usen solo cuando sea necesario. Como tal, las medidas ofrecen modelos sólidos de normas compatibles con la OMC.

En segundo lugar, mientras que la prohibición de importaciones y otras medidas comerciales por lo general se desarrollan de manera unilateral, la efectividad de estos

enfoques se fortalecería con un enfoque colectivo o regional para que los productos de la pesca INDNR no se vendan en otros mercados.

Aunque las OROP han hecho algunos intentos, como la CCRVMA, esto podría extenderse. Lo anterior incluiría la cooperación de los países, de la FAO y OROP e incluso de organismos privados en: la compilación e intercambio de listas de barcos que practiquen pesca INDNR; la estandarización de esquemas de documentación de pesca y requerimientos de trazabilidad; y la prohibición de productos del mar importados, embarcados o transbordados por países que no tomaron las medidas apropiadas para asegurarse de que sus barcos cumplieran con los requisitos necesarios para la pesca. El trabajo de la FAO en la elaboración de directrices para los esquemas de documentación de pesca es especialmente importante.

En tercer lugar, las negociaciones vigentes de acuerdos comerciales regionales son vías importantes para el desarrollo mediante consultas de medidas relacionadas al comercio de productos de pesca INDNR. Existe cierto margen, por ejemplo, para la inclusión de obligaciones INDNR en los acuerdos o acuerdos paralelos asociados y sus capítulos ambientales. En América Latina, la UE y Ecuador trabajan para incluir compromisos de combate a la pesca INDNR como parte de un acuerdo comercial.

En cuarto y último lugar, la cooperación en el uso de medidas comerciales debería ser abierta y transparente, ya sea que las medidas comerciales pertinentes sean principalmente nacionales, como prohibiciones conjuntas a la importación, o que incluyan a la iniciativa privada, como la documentación de control de compras dentro de una cadena de valor.

Los grupos industriales, además de otros actores privados, deberán mantener buenas prácticas de diseño e implementación de sus iniciativas, entre ellas la consulta a los actores afectados y proceder con transparencia, apertura e imparcialidad. Dentro de lo posible, debería existir un apoyo mutuo entre los regímenes de comercio, medio ambiente y derecho del mar (como entre la FAO, Cites, OMC y otros organismos), además de una coordinación de políticas dentro de los mismos países.

❶ Este artículo ha sido adaptado de un estudio más extenso que se puede encontrar en Young, M. (2015). *Trade-related measures to address illegal, unreported and unregulated fishing*. Geneva, Switzerland: ICTSD & WEF.



Margaret A. Young
Profesor asociado en la Escuela
de Derecho de la Universidad
de Melbourne, Australia.

RECURSOS NATURALES

Privatización del agua en América Latina: implicancias para las políticas de desarrollo sostenible

Julien Chaisse

Los servicios relacionados al agua han crecido considerablemente en las últimas décadas, lo que ha implicado un crecimiento de las inversiones y contratos de privatización en el área. De acuerdo a esto, el presente artículo aborda el aumento del papel de los tratados de inversión en el contexto de las disputas y arbitrajes de inversión y ofrece recomendaciones de política respecto a la protección de consumidores y ciudadanos en países latinoamericanos.

El mundo de los servicios del agua cambió de manera significativa en la década de 1990 debido al extraordinario crecimiento de la población mundial. Dicho fenómeno detonó, precisamente, la necesidad de la expansión de los servicios relacionados al agua.

Las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento atrajeron el apoyo de una miríada de instituciones financieras. Estas dieron paso a una variedad de nuevas oportunidades de negocio para que la industria de servicios de agua y saneamiento se enfocara en problemas habituales como la escasez de agua fresca, las inversiones inadecuadas en infraestructura de saneamiento o la incapacidad de las autoridades públicas para satisfacer las necesidades de cobertura.

La incapacidad de las autoridades públicas para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Tal fue el aumento que hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas.

Es un hecho que cada vez más negocios entran a la industria de servicios de agua. Se calcula que para 2025 el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en infraestructura relacionada superará el billón de dólares (Rodríguez, van den Berg & McMahon, 2012).

Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura sin duda aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de "oro azul".

No obstante lo anterior, hay una gran laguna en la normativa relacionada a los servicios de agua. No existe, por ejemplo, un régimen u organismo regulador internacional para los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, la creciente firma de tratados internacionales de inversión en el sector ha resultado en un lento surgimiento de una gobernanza económica internacional para los servicios transfronterizos de agua y saneamiento.

Con una importante participación de países latinoamericanos como partes demandadas –Bolivia, Argentina y México entre ellos–, el presente artículo estudia el aumento del papel de los tratados de inversión en el contexto de las disputas y arbitrajes de inversión. También se ofrecen recomendaciones de política a la luz de las recientes experiencias a fin de equilibrar la necesidad de inversiones extranjeras privadas y la protección de consumidores y ciudadanos en muchos países latinoamericanos.

Aprendizaje y retos resultantes de las decisiones de tribunales internacionales

En años recientes, los inversionistas extranjeros han ejercido cada vez más sus derechos de arbitraje bajo los acuerdos internacionales de inversión (AII). De hecho, a la fecha se han

presentado 21 demandas internacionales por inversiones extranjeras en la industria de servicios de agua (véase [Chaisse & Polo, 2015](#)).

La característica clave para la protección de las inversiones bajo los tratados bilaterales de inversión (TBI) es que permiten que los inversionistas extranjeros disputen las acciones de los gobiernos locales ante un tribunal de arbitraje internacional. Lo anterior es imperativo debido a que los sistemas judiciales nacionales podrían sesgarse frente a los intereses extranjeros. Asimismo, es más probable que las cortes nacionales sucumban ante la presión de otras ramas del Gobierno. Es precisamente la capacidad de llevar las disputas ante árbitros independientes lo que da la certeza de que las autoridades nacionales cumplirán con sus obligaciones internacionales, asegurando un clima de inversión favorable y estable en el país anfitrión.

En el caso de los servicios de agua, en la mayoría de las disputas que se han llevado ante los tribunales y arbitraje de inversión existe un hilo común de temas recurrentes y gran parte de las principales disputas por servicios de agua han involucrado a Argentina, Bolivia, Jordania, Argelia y Tanzania; todos países en desarrollo.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están entre las principales y más grandes fuentes de crédito y asistencia para el desarrollo. A principios de la década de 1990, muchos de los programas y de las recomendaciones que incluían principios de desregularización, liberalización de mercado y privatización de servicios y activos de los Estados estuvieron a cargo de las organizaciones antes mencionadas. Eso motivó a los países en desarrollo a permitir que las empresas de inversión extranjera gestionaran las instalaciones para brindar los servicios de agua que antes estaban en manos de sus Gobiernos. Estas agencias internacionales, en particular, han estado al frente de los programas de privatización del agua y siguen ejerciendo su influencia en el mundo en desarrollo ([Tagliabue, 2002](#)).

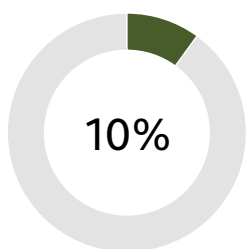
Las disputas han tenido como telón de fondo una crisis mundial de agua que va en aumento. Aunque es un fenómeno global, algunos países han experimentado una cantidad desproporcionada de efectos adversos. Por lo mismo, desde 1990 en adelante muchos Gobiernos y comunidades internacionales han buscado nuevos enfoques para gestionar y optimizar los recursos hídricos. De hecho, suele pasar que los países con los sectores públicos más débiles son los que tienen la mayor necesidad de servicios de agua.

El nuevo movimiento en gestión de servicios de agua con miras a su privatización ahora se considera una opción y una solución atractiva para que las autoridades públicas cuiden su imagen y satisfagan las necesidades básicas de agua de sus pueblos. Antes de los programas de privatización, el agua era vista como un recurso público y en todo el mundo su gestión y suministro corría a cargo de entidades gubernamentales provinciales o municipales. Los Gobiernos tenían la obligación moral de asegurar el acceso a agua limpia y servicios de agua efectivos como parte de los bienes públicos que le debían a sus ciudadanos (véase [ONU, A/Res/54/175](#)).

A principios de los años 90, los países en desarrollo se enfrentaron a una campaña mundial en favor de la participación formal del sector privado en los servicios de agua. Entre 1991 y 2000, el número de países cuyas empresas privadas tomaban parte en los servicios de agua creció de cuatro a 38 y con ello la población que recibía servicios de compañías privadas aumentó de 6 millones a 96 millones.

En 2012, diversas investigaciones revelaron que, en total, en algún momento a partir de 1990 más de 205 millones de habitantes de países en desarrollo han recibido servicios gracias a algún proyecto de participación de iniciativa privada. La tendencia se dio por dos razones principales.

En primer lugar, esto se debió a las iniciativas de las dos agencias internacionales ya mencionadas. Según su punto de vista, la privatización era un medio promisorio para mejorar el débil desempeño de la oferta de los servicios públicos de agua, aumentar la



de los consumidores en todo el mundo reciben actualmente agua vía empresas privadas.

cobertura, elevar la calidad y eficiencia de los servicios, brindar maneras alternativas de infraestructura de inversión y reducir la carga de los presupuestos públicos, lo que reduciría el costo total de los servicios.

En segundo lugar, el mundo en desarrollo está conformado por países cuyas necesidades de capital, financieras y técnicas suelen dificultar o incluso imposibilitar la construcción de infraestructuras adecuadas para ofrecer agua fresca a sus ciudadanos. Como respuesta a la demanda de la población, los países en desarrollo abrieron sus mercados de servicios de agua a las compañías internacionales. Por lo mismo, y al ser dichos países ubicaciones deseables para la inversión extranjera, especialmente tras los procesos de liberalización, casi las 21 demandas por servicios de agua han sucedido en países en desarrollo.

Diversos países en desarrollo no cuentan con los recursos, ya sea de conocimientos, tecnología o financiamiento para enfrentar la abrumadora demanda de sus crecientes poblaciones. El Banco Mundial calcula que el costo de los servicios de agua en todo el mundo llegará a los US\$ 60 mil millones anuales para 2020. Ofrecer el servicio no es tarea fácil, sobre todo si estos países suelen estar endeudados y sin capital suficiente. Un financiamiento deficiente resulta en dificultades en el manejo del suministro de agua, además de la incapacidad para financiar y operar instalaciones existentes.

Conforme crece la demanda, también debe hacerlo el nivel de sofisticación tecnológica para brindar servicios de agua. Se necesitan tecnologías avanzadas y nuevos conceptos de infraestructura para abastecer la mayor demanda de agua potable. No todas las empresas de agua, especialmente las estatales, tienen la habilidad, capacidad o conocimientos para ocuparse de estas responsabilidades.

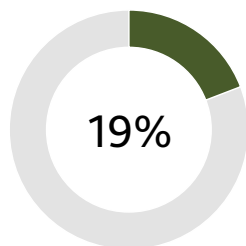
Además, desde que la ONU reconoció el derecho al agua de todas las personas aumentaron los estándares de acceso, calidad, suministro continuo, reutilización eficiente, disminución de la contaminación, disminución de pérdidas, calidad general del servicio, eficiencia operativa, expansión de cobertura, niveles tarifarios, precios del agua, procesos de tratamiento, expansión de infraestructura, mejoras tecnológicas, nuevas estrategias de manejo y más. Es claro que la inversión en instalaciones para servicios de agua es delicada y deben considerarse muchos parámetros. El mercado de inversión resultante es complejo, aunque también lucrativo.

En general, la privatización se ha visto como una solución viable para que los países en desarrollo cumplan con sus obligaciones relacionadas al agua, pues eso le permite a sus Gobiernos contar con servicios eficientes para sus ciudadanos.

De manera simultánea, la privatización genera ganancias y maximiza la eficiencia. Argentina, a mediados de los 90, tuvo uno de los proyectos de privatización más grandes y significativos y es, además, el país en desarrollo que más aparece en disputas de arbitraje por temas de servicios de agua (véase párr. 26, Caso No. ARB/03/19).

Las autoridades argentinas ofrecían servicios de agua y de tratamiento de aguas residuales tan insuficientes que casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires no tenía acceso a agua potable. El acceso a servicios de drenaje era de mala calidad y a veces inexistente. Era necesario reemplazar casi todas las tuberías e instalaciones de suministro de agua. Su tecnología para aguas residuales era arcaica y carecían de los fondos necesarios para crecer o reparar los servicios en general (Caso No. ARB/97/3).

La situación específica de Argentina puede tomarse como un clásico caso de privatización. Argentina se inclinó, durante las primeras etapas de la privatización de servicios de agua, por una concesión de 30 años con un inversionista francés para la operación y gestión del agua del país y de sus servicios de tratamiento de aguas residuales para así por fin cumplir con las obligaciones que tenía con su gente.



de los latinoamericanos carece de acceso a servicios de higiene, unos 100 millones de personas.

Recomendaciones de política: privatización y desarrollo sostenible

Durante la última década se ha dado un dramático surgimiento de disputas de inversión entre inversionistas extranjeros y Gobiernos de países sede. A los paneles de arbitraje se les ha encomendado la tarea de aplicar las reglas de los AIJ en casos específicos, una tarea que no suele ser sencilla debido a los amplios y ambiguos términos de los acuerdos.

Este nuevo fenómeno de litigio de inversiones ha resultado en varias decisiones de los tribunales de arbitraje dentro del sector de servicios de agua. La mayoría de las disputas ha tenido que lidiar con la incertidumbre generada por la regulación estatal referente a los contratos de concesión.

En términos técnicos, no se dieron problemas de expropiación, sino más bien brechas con relación al trato justo y equitativo. Tales decisiones contribuyeron a la formación de una jurisprudencia de servicios de agua embrionaria y al esclarecimiento de disposiciones, conceptos y definiciones clave integradas a los TBI y a los contratos de concesión relacionados con los servicios de agua. Todo esto derivó en la emergencia de un marco de trabajo para la regulación económica global de la industria de servicios de agua y saneamiento.

La definición de inversión ahora mismo incluye a los servicios de agua y saneamiento, una forma relativamente nueva de inversión en el escenario transnacional. Es más, el derecho internacional de inversiones se ha vuelto lo suficientemente flexible como para atraer a este tipo específico de disputas altamente sensibles.

Los tratados internacionales de inversión y los tribunales a cargo de aplicar dichas reglas han contribuido de manera significativa a delinear y dar sustancia a la jurisprudencia internacional de servicios de agua y al emergente régimen económico internacional de servicios de agua.

El mundo de la inversión cubre un hueco que ninguna otra organización había podido llenar. Aunque la principal tarea de un tribunal de inversión es aplicar tratados que protejan a los inversionistas extranjeros, los mismo tribunales podrían no estar bien equipados para considerar problemas no económicos como aquellos inherentes a la industria de regulación de servicios de agua.

Aunque la jurisprudencia de inversión podría considerarse un avance hacia la regulación de un servicio importante, también enfatiza la falta de un enfoque holístico más global para la regulación de los servicios y acceso al agua. Las investigaciones futuras tendrán que encontrar los medios para reconciliar los grandes avances hechos en el área de inversión con la urgente necesidad de asegurar que el incipiente derecho del ser humano al agua reciba la misma consideración en años venideros.

En un nivel más práctico, los servicios de agua ya no dependen de la competencia de la regulación doméstica. Los AIJ son el estándar, especialmente en ausencia de estándares de la Organización Mundial de la Salud. Es más, el régimen internacional de inversiones contribuye a la internacionalización del régimen de los servicios de agua.

Los Gobiernos, por el contrario, deben diseñar políticas para servicios de agua que cumplan con un trato justo y equitativo, normas de expropiación y una protección y seguridad total, ya que de no hacerlo podría resultar costoso y disuadir a los inversionistas extranjeros de ofrecer servicios de alta calidad. Si los tomadores de decisiones no están de acuerdo con dicha realidad deberán rediseñar y reestructurar la ley internacional aplicable.

También es importante recordar que la ley y las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son relevantes, pues el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) podría aplicarse a los servicios de agua transfronterizos de los miembros. Sin embargo, no existen listas de compromisos para servicios de agua de los miembros de la OMC debido a que cuando se celebró la Ronda de Uruguay los servicios de agua eran

todos públicos. De hecho, tampoco hay ofertas para servicios de agua en las ofertas de servicios en el marco de la Ronda de Doha.

No existen, por lo pronto, compromisos especiales bajo el AGCS, dejando al acuerdo y a la OMC en sí atrasados con respecto a la situación mundial y fortaleciendo el papel de los acuerdos de inversión en ausencia de compromisos relevantes en la OMC.

La definición del término "inversión", por lo general, es bastante amplia, por lo que para evitar una exposición significativa a demandas de inversión uno debe preguntarse si la inversión es necesaria para contribuir al desarrollo –los países podrían eliminar a los servicios de agua del concepto general de inversión en dichos acuerdos.

El problema es si la contribución al desarrollo de los AI debe convertirse en un criterio para su elegibilidad. Los Gobiernos sede querrán asegurarse de proteger las inversiones solo si estas contribuyen al desarrollo. Los inversionistas seguro verán tal requerimiento como una incertidumbre sustancial debido a la ausencia de una definición establecida de desarrollo. Si este requerimiento se incluyera en el acuerdo, un Gobierno sede podría decir que el tribunal no tiene jurisdicción, apelando a la idea de que la inversión no contribuyó al desarrollo.

Tanto la conclusión teórica como la práctica mostradas en este artículo anticipan próximos desarrollos y ayudan a exponer el panorama de la investigación y debates venideros en la gobernanza global de servicios de agua y saneamiento. La creciente necesidad de servicios de agua ocasionada, entre otras cosas, por el calentamiento global, el cambio climático y las nuevas tecnologías como el gas de esquisto significa que aumentará la inversión extranjera en servicios de agua.

Los gobiernos deben anticipar este aumento mediante un enfoque más proactivo en la planeación y diseño de los principios internacionales que deban regular los servicios de agua, incluyendo servicios de agua bajo la competencia del AGCS de la OMC.



Julien Chaisse

Jefe principal y director del
World Trade Advisors (WTA),
International Trade Law Group.

REPORTAJE ESPECIAL

Equidad, comercio y sostenibilidad, retos de América Latina

¿Cuáles son algunos de los grandes retos de América Latina? ¿Cómo abordarlos y qué recomendaciones se hacen al respecto? Estas y otras preguntas son abordadas en el siguiente artículo a raíz de las discusiones ocurridas en el Foro Económico Mundial en América Latina en su edición 2015.

Las proyecciones de crecimiento para la región según el Fondo Monetario Internacional podrían ser apenas del 0,5% para este año. Los efectos generalizados de la desaceleración económica, el menor crecimiento de Estados Unidos y China – principales socios comerciales de la región –, la crisis social y política en algunos de nuestros países, la caída de los precios de las materias primas, el empeoramiento de las condiciones financieras externas y la desigualdad en América Latina componen el panorama global que tanto los actuales como futuros líderes de la región deben abordar con urgencia.

El Foro Económico Mundial (FEM) en Latinoamérica, en su edición 2015, envió llamados para una agenda de renovación para la región a fin de atender, pero más importante aún, resolver retos en clase media, educación, comercio e inversión, energía, negocios, género, estabilidad macroeconómica y Estado de Derecho.

Más equidad, más crecimiento

De acuerdo al Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, equidad y crecimiento van de la mano y son aspectos complementarios para asegurar el potencial de crecimiento en el largo plazo. El precio de la inequidad, como advierte en su libro homónimo, o mantener los poderes monopólicos y la falta de oportunidades en educación, es un costo para todos muy alto y un gran desacierto.

Las recomendaciones del Premio Nobel resultan muy relevantes pues uno de cada cinco latinoamericanos, o cerca de 130 millones de personas, viven en la pobreza. Los recursos naturales, sin inversión en capital humano e infraestructura, sin que se abone a corregir la inequidad y se fomenten oportunidades para todos, efectivamente se convierten en una maldición para los países de la región.

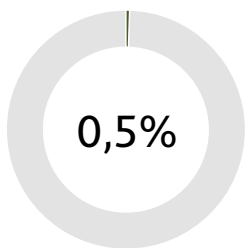
Para cerrar la brecha en infraestructura en la región, por ejemplo, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (Cepal), los países necesitarían invertir 6,2% de su producto interno bruto (PIB). No obstante, por ahora solamente destinan 3,5% del PIB para los rubros de transporte, energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento.

El papel del comercio y la inversión

Los desafíos más inminentes que América Latina enfrenta en este flanco son las negociaciones megarregionales, la implementación de la facilitación del comercio y la participación en las cadenas de valor, así como la comprensión y la incorporación de normas emergentes (ver [Puentes](#), febrero 2015).

En relación a las meganegociaciones, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en el que participan Chile, México y Perú, se han escuchado voces de apoyo, pero también de reproche.

Secrecía y respuesta a intereses privados acotados, como los farmacéuticos, además de la posibilidad de cuestionar políticas públicas como la salud a través de las cláusulas de arbitraje inversionista-Estado son fuente de preocupación para economistas como Joseph E. Stiglitz, quien está a favor del comercio, pero considera que el TPP incrementaría la desigualdad.



podría ser el crecimiento de América Latina para este 2015 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.

Por lo pronto, las autoridades de Chile, México y Perú han destacado reiteradamente los beneficios del llamado "acuerdo del siglo XXI" en cuanto a acceso a mercado, desarrollo y actualización de normas, geopolítica y nueva arquitectura del comercio internacional.

Alianza del Pacífico atrae atención

Quien cuenta con más adeptos y sigue recibiendo la atención del resto de América Latina, pero también de otras latitudes es la plataforma de integración regional para la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales conocida como Alianza del Pacífico, compuesta por Chile, Colombia, México y Perú (ver [Puentes, septiembre 2014](#)).

Tim Groser, actual ministro de comercio y cambio climático de Nueva Zelandia, quien también asistió al FEM en América Latina, planteó que su país sea miembro pleno o bien firme un acuerdo de libre comercio con la Alianza, aliento que se ha mantenido hasta el día de hoy.

La iniciativa más pragmática del continente, cuya condición para la membresía era precisamente la existencia de acuerdos de libre comercio entre los miembros, sigue ganando popularidad e impulso. Su vinculación con el sector empresarial, la cooperación en promoción comercial y ventanilla única, la eliminación de visados entre los países y el desarrollo de una mirada común le está permitiendo a la Alianza avanzar en su estrategia y objetivos.

No obstante lo anterior, incrementar el comercio intra Alianza –que ronda entre el 2% y el 20% de acuerdo a las exportaciones totales de cada miembro–, formar cadenas de valor dentro de la zona y construir una visión de largo plazo hacia Asia-Pacífico que ubique el desarrollo sostenible en el centro de su mandato son algunos de los desafíos que deben abordar los cuatro países y aquellos que se enfilan a pertenecer al grupo.

Facilitación del comercio y cadenas de valor

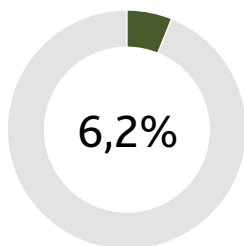
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, una vez implementado en su totalidad, podría proporcionar una reducción del 10% en los costos de las operaciones de comercio en los países desarrollados y entre 13 y 15,5% en los países en desarrollo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La incorporación de sus principios y normas, no obstante, implica inversión en infraestructura, capital humano, tecnología y transparencia. Actualmente son las empresas que están bien conectadas a la infraestructura quienes han obtenido las mayores ganancias de la facilitación del comercio. Las áreas de oportunidad, por lo tanto, son mayúsculas para ampliar la conectividad, la confianza y los negocios en la región (ver [Puentes, junio 2014](#)).

A su vez, la creación de las cadenas de valor en América Latina para participar en la actual dinámica del comercio internacional conlleva mejorar la capacidad manufacturera, invertir en capital humano y sumar a las pequeñas y medianas empresas en los modelos de negocios de empresas multinacionales (ver [Puentes, junio 2014](#)). El papel de la política pública así como la coordinación con el sector privado, por lo tanto, se vuelven vitales, sobre todo porque el comercio intrarregional no supera el 20%.

Por su parte, la coherencia regulatoria es un tema que se ha vuelto muy importante entre los integrantes del TPP y de la Alianza; los países de la región buscarían incorporar mejores prácticas, a pesar de las dificultades que esto podría implicar. El reconocimiento del papel de la competencia también se está tornando cada vez más necesario en las normas emergentes de comercio internacional.

"Decisiones políticas, institucionales y de infraestructura son fundamentales para aprovechar los beneficios del comercio internacional en América Latina", declaró Ricardo Meléndez-Ortiz, director ejecutivo de ICTSD, en el marco de esta reunión de alto nivel.



del producto interno bruto
necesitarían invertir los países
de América Latina para cerrar la
brecha en infraestructura.

Daniel Marteleto Godinho, secretario de Comercio Exterior de Brasil, por su parte, comentó que los acuerdos de libre comercio, bilaterales o megarregionales, no necesariamente generan comercio. "Los subsidios agrícolas son un tema que necesariamente tiene que ser tratado en el plano multilateral", agregó.

Energía y sostenibilidad

La definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la próxima Conferencia de la Partes sobre cambio climático, en la que podría llegarse a un nuevo acuerdo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, podrían plantear desafíos interesantes al futuro de la energía y la sostenibilidad. La matriz energética de América Latina se encuentra altamente concentrada en hidroeléctricas, pero aún depende fuertemente de los combustibles fósiles.

De acuerdo al presidente ejecutivo de Amec Foster Wheeler, Samir Brikho, hacia 2030 las perspectivas sobre energía global dependerían en un 25% de plantas a carbón, 20% de petróleo, 28% de gas, 8% en hidroeléctricas, 8% en nucleares y el resto en energías renovables, en donde la energía solar se convertiría en el centro al proveer 8% de la energía mundial.

América Latina podría jugar un papel fundamental en tanto las fuentes de energía renovable podrían satisfacer hasta 22 veces la demanda de electricidad proyectada para el 2050 dado su gran potencial, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, los países necesitarían urgentemente reducir los subsidios a los combustibles fósiles debido a sus efectos distorsionadores, invertir en tecnología y tomar las decisiones políticas que se requieren para transitar hacia energías sostenibles, incluyendo la eliminación de las barreras comerciales sobre bienes ambientales.

La región también podría explorar una mayor colaboración al integrar sus redes de electricidad y conectividad a lo largo de Latinoamérica, en tanto las ganancias en relación con la eficiencia y la cooperación podrían ser muy interesantes en ese camino futuro.

Ruta para la transición

Instituciones fuertes, una estrategia económica sólida que mire más allá de las materias primas e inversiones en infraestructura son algunos de los componentes del camino para la transición en América Latina, concluyeron los participantes en esta reunión del FEM.

La receta que incluye un mejor sistema de salud, más empleo, más inclusión, aumentar los salarios mínimos, más inversión en educación y capacitación de la fuerza laboral, entre otros elementos, es ya bien conocida.

El desafío esencial para América Latina, principalmente debido a la contracción en el crecimiento de China y Asia, es hacer la tarea interna y mantener una visión de largo plazo.

Innovación, tecnología y una participación más activa en la sociedad del conocimiento, sobre todo de los jóvenes, son otros aspectos que tanto los gobiernos como el sector privado deben procurar en esta agenda renovada según el Foro Económico Mundial.

Sala de prensa

Visite nuestro sitio web para consultar más novedades: <http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes>

Uruguay renuncia a negociaciones TISA

El gobierno de Uruguay tomó la decisión de abandonar las negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés).

La decisión obedece a que el partido Frente Amplio, la coalición que gobierna el país, rechazó en septiembre la participación en dichas negociaciones debido a su "visión sobre el desarrollo integral de la nación".

"Buscaremos de alguna manera otros acuerdos comerciales que incluyan servicios", señaló el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa a propósito de la decisión.

Si bien aún no hay una fecha para concluir las negociaciones, las partes involucradas deberían reunirse en octubre y en diciembre de este año a fin de avanzar en las conversaciones, además debería darse una nueva ronda de evaluación a principios de enero.

TPP se reagrupa tras la reunión de Hawái

Los 12 países participantes de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se están preparando para retomar las conversaciones en las siguientes semanas a fin de avanzar tras la fallida ministerial de julio pasado.

El ministro japonés de Economía ha señalado que se está alcanzando gradualmente un nuevo impulso entre los países miembros a fin de llevar a cabo una nueva reunión ministerial que muestre mayores progresos.

No obstante lo anterior, es posible que las negociaciones se extiendan si no se llega pronto a un acuerdo o antes de que procesos electivos se lleven a cabo en algunos de los países miembros del TPP.

En caso de cumplirse, el acuerdo implicaría cerca del 40% de producto interno bruto mundial e incluiría aproximadamente 30 capítulos relacionados a la propiedad intelectual, competencia, comercio electrónico, trabajo y otros.

Corte de Canadá acoge caso Chevron-Ecuador

La Corte Suprema de Canadá señaló en septiembre tener jurisdicción para acoger el caso entre Ecuador y Chevron por la grave contaminación ambiental de la Amazonía ecuatoriana.

La decisión permite iniciar una batalla legal entre las partes en un juzgado canadiense de primera instancia que reconozca y haga cumplir el fallo ecuatoriano.

La compañía Texaco, adquirida en 2001 por Chevron, habría extraído petróleo entre 1964 y 1992 bajo mínimos estándares operacionales, creando uno de los mayores desastres de petróleo.

Algunas estimaciones consideran que la contaminación de la Amazonía es 80 veces superior al desastre en el Golfo de México en 2010 por parte de la petrolera BP, la que pagaría una indemnización de US\$ 19 mil millones.

Alianza del Pacífico trabaja en normas alimentarias

El bloque comercial, compuesto por Chile, Colombia, México y Perú, ha venido realizando diversas coordinaciones rumbo a la homologación de normas técnicas para la producción de alimentos.

Reunidos a través del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, diversos sectores industriales esperan reducir costos y facilitar el comercio dentro y fuera de la Alianza.

Lo anterior busca la armonización de normas para la elaboración de alimentos procesados, reconocimiento de los registros sanitarios y fitosanitarios para alimentos frescos y la producción y rotulado de bebidas no alcohólicas, entre otros.

Silvia Hooker, gerente de comercio exterior de la Sociedad Nacional de Industria de Perú, resaltó la importancia de los elementos mencionados con miras al establecimiento de una ventanilla única de comercio exterior para el reconocimiento de registros fitosanitarios dentro de los países de la Alianza del Pacífico.

Delegaciones se preparan para cita en París

Los copresidentes de las negociaciones para un nuevo acuerdo global sobre cambio climático se han reunido a fin de ir preparando los últimos detalles para la cita final de diciembre en París.

En la última reunión en Bonn, Alemania, realizada entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, las Partes de la CMNUCC acordaron que el documento final debe ser conciso, destacar opciones manejables y basarse en un "texto de negociación de Ginebra".

Ahmed Djoghlaif de Algeria y Daniel Reifsnyder de Estados Unidos, copresidentes a cargo de dirigir el ADP, darán a conocer el texto a comienzos de octubre, a tiempo para la próxima ronda de negociaciones del mismo mes.

Los copresidentes han propuesto que las negociaciones de la próxima sesión se lleven a cabo sobre la base de un grupo de redacción abierto, marcando un giro de los grupos temáticos más pequeños de rondas pasadas. Dicha decisión fue bien recibida por las partes interesadas y de hecho fue tomada como una evidencia del progreso.

TLC China-Australia en espera de ratificación

Luego de una década de negociaciones, China y Australia firmaron, en junio pasado, un tratado de libre comercio. El camino para su ratificación en Australia, no obstante, se ha tornado complicado por el impacto del acuerdo en su mercado laboral.

El Partido Laborista exige la aprobación de una legislación que salvaguarde los empleos australianos y garantice que los ingresos nacionales no se verán afectados; mientras que el Partido Liberal defiende vigorosamente el acuerdo.

El acuerdo eliminará aranceles para el 85% de las exportaciones australianas, alcanzando a cubrir con el tiempo el 95% del universo arancelario. El acuerdo también incluyó concesiones significativas en servicios. De hecho, Australia recibirá mayor acceso a dichos mercados.

Para la aprobación, los grupos políticos de Australia están esperando el informe de un comité parlamentario de fines de octubre. Luego, el gobierno australiano pondría a votación la legislación secundaria a fin de que el acuerdo comercial entre en vigor a fines de año.

Países andinos e integración energética

Las autoridades gubernamentales de la energía y electricidad de los países andinos se reunieron el pasado 4 de septiembre en Santiago de Chile en el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina a fin de discutir avances en normas e infraestructura.

Según la Comunidad Andina, el encuentro sirvió para presentar los avances en la Hoja de Ruta del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea) destacando los avances en infraestructura y materia regulatoria. Asimismo, se realizaron presentaciones técnicas sobre el diseño de la nueva normativa regional sobre electricidad.

Los Estados suscribieron además una declaración comprometiéndose a impulsar políticamente el proceso de integración andina y a realizar las coordinaciones regulatorias pertinentes.

En un área similar, los presidentes de Chile y Perú recientemente discutieron la posibilidad de fortalecer su integración energética generando un diálogo entre los ministros de Energía de ambos países.

China establece fondo de cooperación con la región

El Banco Popular de China (Banco Central) anunció la creación del Fondo Chino-Latinoamericano de Inversión para la Cooperación en Capacidad Productiva con un capital inicial de US\$ 10 mil millones para promover la cooperación industrial con América Latina.

El fondo será administrado por el Banco Popular de China, la Administración Estatal de Divisas Extranjeras y el Banco de Desarrollo de China. El fondo se centrará en los sectores de manufacturas, nuevas tecnologías y agricultura brindando financiamiento a mediano y largo plazo.

El presidente de China, Xi Jinping, fijó como objetivo que el comercio bilateral alcance los US\$ 500 mil millones dentro de los próximos 10 años. También ha propuesto que la inversión extranjera directa china en la región logre los US\$ 250 mil millones en el mismo período.

El comercio de bienes entre las partes pasó de US\$ 12 mil millones a casi US\$ 275 mil millones entre 2000 y 2013. En este último año, el 73% de los bienes exportados por la región a China fueron productos primarios.

Publicaciones sugeridas

Puentes recomienda en esta sección algunas nuevas publicaciones de ICTSD y otras instituciones que están contribuyendo al estudio y una mejor comprensión del comercio internacional, con implicaciones también para América Latina.



Derecho internacional de inversión y gobernanza de recursos naturales **International Investment Law and Natural Resource Governance**

La siguiente publicación de la Iniciativa E15 se centra en un tema de particular importancia en nuestra región. Para el autor, dado que los recursos no se encuentran equitativamente distribuidos en el territorio, los intereses de los inversionistas podrían no estar alineados con los de las comunidades locales y generar confrontaciones.

La publicación presenta los principales pilares del derecho internacional de inversión y brinda un panorama global sobre el tema. El autor, luego, analiza la relación Estado-Inversionista-Población y trata temas como el acceso, la soberanía y la redistribución desde una perspectiva legal. <http://bit.ly/1Ox12gU>



Derecho y políticas de competencia y el sistema multilateral de comercio **Competition law/policy and the multilateral trading system**

Uno de los aspectos principales de la Ronda de Doha ha sido eliminar las barreras a la libre competencia. Por ello, la siguiente publicación de la Iniciativa E15 busca atraer la atención hacia una serie de elementos que deberían ser tomados en consideración por los Estados para proseguir la eliminación de las barreras a la competencia, brindando sugerencias específicas al respecto.

De acuerdo a esto, los autores analizan los avances realizados dentro de la OMC, las normas de competitividad en los acuerdos comerciales regionales y analizan otros avances ligados al ambiente global de políticas relacionadas a la competencia.

<http://bit.ly/1EKqWvr>



¿Cómo podemos saber (más) sobre los efectos de la regulación en el comercio? **How can we know (more) about the trade effects of regulation?**

La investigación gira en torno a cómo los estándares y las regulaciones nacionales vienen cobrando mayor importancia en un mundo cada vez más integrado. Es en este escenario que un mayor conocimiento sobre los efectos de los estándares nacionales en el comercio internacional es necesario para que los reguladores puedan tomar decisiones informadas. Sin embargo, para el autor, la Organización Mundial del Comercio (OMC) no provee en la actualidad suficiente transparencia al respecto. Por lo mismo, el presente documento analiza el escenario actual de transparencia de la OMC y brinda recomendaciones sobre cómo otorgar más información sobre los efectos de la regulación en el comercio.

<http://bit.ly/1EKoeGb>



Energía renovable y procesos y métodos de producción **Renewable energy and process and production methods**

La electricidad es considerada según el derecho internacional actual como un bien. En tiempos actuales, la búsqueda de producir electricidad de fuentes renovables y limpias cobra más importancia conforme la humanidad se da cuenta de la necesidad de luchar contra el cambio climático. Sin embargo, las propiedades físicas de la electricidad no varían según el modo de producción que haya sido utilizado para su creación dificultando el otorgamiento de preferencias a la electricidad de fuentes limpias.

La siguiente publicación de la Iniciativa E15 analiza la posibilidad de regular y brindar tratos diferenciados a las energías renovables y no renovables. Para ello el estudio analiza la normativa vigente dentro de la OMC. <http://bit.ly/1Kn97Dm>



América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los ODM

Muy cerca de que los Estados definan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la siguiente publicación de la Comisión Económica para América Latina analiza el desempeño de la región latinoamericana rumbo al cumplimiento de las metas planteadas bajo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La investigación incluye una amplia gama de tablas, gráficos y estadísticas que permiten un análisis del avance regional rumbo a los referidos ocho objetivos. La publicación además introduce los principales retos para América Latina bajo los nuevos 17 objetivos que la Agenda 2030 incluirá, resaltando la reducción de la desigualdad que persiste en nuestra región. La publicación resalta también la inclusión por primera vez la erradicación de la pobreza extrema como objetivo para el 2030, objetivo factible en nuestra región si se mide sobre el estándar mundial establecido. <http://bit.ly/1Faqbfl>



Impactos económicos del cambio climático en Colombia: especies nativas y biocomercio

A pesar de representar solo el 0,7% de la superficie terrestre, el territorio colombiano alberga el 10% de la biodiversidad global, siendo uno de los 7 países más importantes en este rubro. Esta diversidad biológica se da en gran medida por la gran diversidad de ecosistemas existentes en el país, lo que permite el cultivo de numerosos productos biológicos que sirven como herramienta de desarrollo económico.

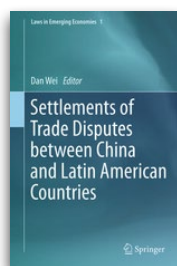
La siguiente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo analiza los efectos que el cambio climático podría tener sobre la biodiversidad en Colombia. Para esto, se seleccionan 17 especies priorizadas tomando en cuenta tres escenarios climáticos y se realizan estimaciones hasta 2099 considerando el impacto económico de estos cambios. Cabe destacar que el estudio encuentra un balance general positivo para las especies referidas frente al cambio climático bajo los escenarios mencionados. <http://bit.ly/1irYxzW>



La alta y baja política del comercio The high and low politics of trade

La alta política incluye los asuntos esenciales para la supervivencia del Estado. La baja política, por su parte, se refiere a los demás temas del manejo del Gobierno. Históricamente, el comercio y la inversión han sido considerados dentro de la baja política; sin embargo, en el actual escenario estos vienen cobrando importancia geopolítica.

Por ello, la siguiente publicación del Foro Económico Mundial argumenta, a través de la presentación de diversos artículos académicos, la necesidad de que la Organización Mundial del Comercio retome su papel como núcleo del comercio internacional. De lo contrario, uno de los principales riesgos podría estar en la proliferación de diversas normas de comercio internacional que, al contradecirse, podrían ser una gran amenaza para la operación de las cadenas globales de valor y otros aspectos de gobernanza mundial. <http://bit.ly/1Ku1jvI>



Solución de diferencias comerciales entre China y los países de América Latina Settlements of trade disputes between China and Latin American countries

Las economías emergentes han ganado una creciente importancia en el comercio mundial. El surgimiento de bloques como BRICS es un claro ejemplo de esto. Sin embargo, algunos Estados cuentan con legislaciones complejas y poco estudiadas a nivel internacional.

La siguiente publicación se centra en las regulaciones comerciales brasileñas con un foco especial en sus relaciones con China. El estudio analiza legislaciones referentes al antidumping y a las medidas comerciales correctivas. Con el aporte de diversos académicos de Brasil y la región, el estudio también analiza el sistema de acceso de nuevos miembros a la Organización Mundial del Comercio, las diferencias entre México y China y otros temas de interés. <http://bit.ly/1iBPQ6O>

SIGA EXPLORANDO EL MUNDO DEL COMERCIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA RED BRIDGES DE ICTSD

PONTES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla portuguesa- *Idioma português*
www.ictsd.org/news/pontes

BIORES

Análisis y noticias sobre comercio y ambiente para una audiencia global- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/biores

BRIDGES

Noticias relativas al comercio mundial desde una perspectiva de desarrollo sostenible- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges

桥

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla china- *Idioma chino*
www.ictsd.org/news/qiao

МОСТЫ

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo con enfoque en los países del CEI- *Idioma ruso*
www.ictsd.org/news/bridgesrussian

BRIDGES AFRICA

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges-africa

PASSERELLES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma francés*
www.ictsd.org/news/passerelles



Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Chemin de Balexert 7-9
1219 Geneva, Switzerland
+41-22-917-8492
www.ictsd.org

La producción de PUENTES es posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes, que incluyen:

DFID – Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido

SIDA – Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional

DGIS – Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dinamarca

Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia

Ministerio de Relaciones Exteriores, Noruega

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia

PUENTES también recibe contribuciones en especie de nuestro socio colaborador y de los miembros del Consejo Editorial.

PUENTES recibe publicidad pagada y patrocinios para apoyar el costo de la publicación e incrementar su impacto a nivel global y en Latinoamérica. La aceptación de las propuestas queda a discreción de los editores. Las opiniones expresadas en los artículos firmados de PUENTES son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de ICTSD.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons de Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Precio: US\$ 10.00
ISSN 1563-0013

